



Sheila Bair, de la FDIC.

Crece el costo del rescate

Reuters

El plan del gobierno de Estados Unidos que busca quitar los activos en problemas a los bancos, podría obligarlos a registrar grandes pérdidas, pero recuperaría la confianza en el sistema financiero.

Así dijo Sheila Bair, jefa de la Agencia Federal de Seguros de Depósito (FDIC, por su sigla en inglés), quien asegura que el costo del programa podría superar los 700,000 millones de dólares que aprobó el Congreso para rescatar al sistema financiero de EU.

Bair asegura que el mayor desafío sería persuadir a las instituciones bancarias y a los contribuyentes a aceptar el plan.

“Hay que tener coraje para hacer esto. La historia demuestra que reconocer las pérdidas y llegar a la raíz del asunto es la manera para reimpulsar a la economía”, dijo Bair.

El gobierno de EU planea invitar a diversos inversionistas privados a comprar los activos tóxicos, ofreciendo financiación a bajo costo, aunque todavía se discute sobre la extensión del subsidio federal, expresó Bair.

Bair enfatizó que los bancos forzados a asumir grandes pérdidas, podrían no necesitar más dinero fiscal porque, una vez limpios, estarían en posición de recaudar fondos a través de inversionistas privados. ■



Espacio OCDE

JEFF DAYTON-JOHNSON

Impuestos y gasto en América Latina *

América Latina no ha descuidado la política fiscal. Desde el fin de la crisis de la deuda de la década de 1980, los gobiernos de la región se han apretado frecuentemente el cinturón. Los déficits fiscales han caído desde 11% de los ingresos públicos en las décadas de 1970 y 1980, hasta sólo 8% en la presente década.

La volatilidad interanual de los impuestos, el gasto y los déficits, un rasgo de la política fiscal tradicional en la región y que tiene efectos dañinos para el desempeño económico, ha descendido de un modo similar: un índice de volatilidad del déficit calculado por las “Perspectivas Económicas de América Latina 2009” muestra un descenso de un tercio entre 1990-94 y 2000-06, con AL situada sólo 6% por encima de los niveles de volatilidad de los países de la OCDE en el último periodo.

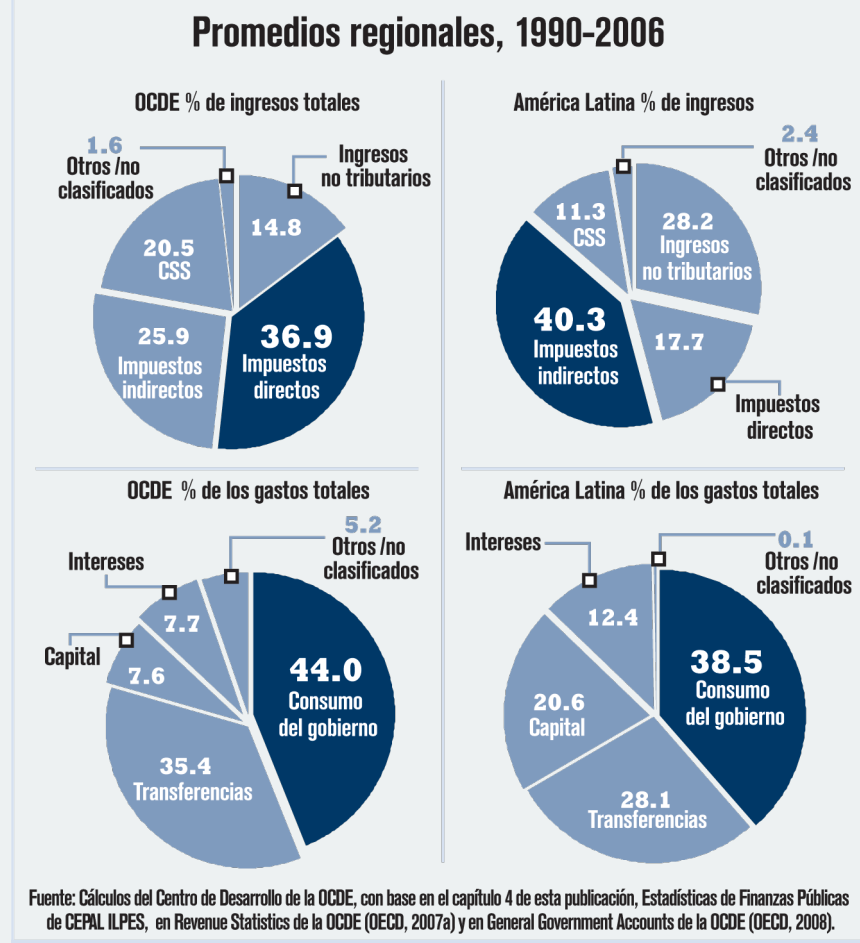
LOS LOGROS

Estos logros no fueron fáciles, por lo que deben ser adecuadamente reconocidos. Pero la estabilización macroeconómica no es el único objetivo de la política fiscal.

Los sistemas fiscales pueden proporcionar los recursos necesarios en pro del crecimiento. Mientras que los impuestos y el gasto público pueden ser utilizados para combatir de manera directa la pobreza y la desigualdad.

El potencial positivo de la política fiscal está siendo significativamente infrautilizado en América Latina.

Mientras los impuestos y las transferencias sociales reducen la desigualdad en 19 puntos de Gini en Europa, la diferencia es de menos de dos puntos en AL (el índice de Gini es una medida de la desigualdad de la renta que va desde cero. Todo el mundo tiene la misma a 100).



LAS DESVENTAJAS

El gasto en seguridad social en AL está fuertemente sesgado en favor de los hogares de renta más alta, lo que lo convierte en uno de los principales culpables de que la política fiscal no haya materializado su potencial redistributivo.

Asimismo, la calidad de los bienes y servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación, tampoco cubre las necesidades de desarrollo de la región ni les da a los ciudadanos incentivos para comprometerse con el Estado.

En el periodo de 1990-2006, el gasto de gobiernos alcanzó una media de 25% del PIB en AL. Fue de 44% en los países de la OCDE.

Para salvar el déficit de desarrollo de la región hace falta más dinero (cerca de 200 millones de personas viviendo en la pobreza, número llamado a crecer por los recientes incrementos en los precios de

los alimentos y la energía), pero de qué modo se gasta dicho dinero es igual de importante, si no más.

El caso de la educación es ilustrativo: los gobiernos de otras regiones emergentes dedican aproximadamente la misma cantidad por alumno que países como Brasil, Chile, Colombia y México pero, en los exámenes internacionales estandarizados, sus estudiantes obtienen resultados mejores que los de AL.

Los gobiernos de AL necesitan más dinero para alcanzar sus objetivos

FALTA MÁS

Los latinoamericanos no sólo necesitan un gasto público de alta calidad, sino también unos ingresos públicos de calidad,

recaudados con justicia y que gocen de una base amplia.

Los ingresos no impositivos, vinculados a menudo a las volátiles exportaciones de recursos naturales, son mucho más importantes en AL, con una media de al menos 8% del PIB en el periodo comprendido entre 1990-2006.

Por el contrario, los ingresos impositivos sólo representan 16% del PIB de la región, frente a 35% de los países de la OCDE.

POCOS INGRESOS

De la porción de impuestos directos que recae sobre individuos y empresas, que representa más de 40% de los ingresos impositivos en los países de la OCDE, sólo 4% procede de impuestos sobre la renta de los individuos, frente a 27% en la OCDE.

La dependencia, respecto de los impuestos indirectos y los ingresos no

impositivos, hace que los ingresos gubernamentales resulten más volátiles y menos progresivos en AL.

El desempeño del sistema fiscal de un país ofrece una instantánea del contrato social que vincula a su gobierno con sus ciudadanos. La provisión pública de bienes y servicios públicos en cantidad y calidad razonables, por una parte, así como unos sistemas impositivos transparentes y progresivos, por la otra, son signos de un contrato social saludable.

Si los bienes públicos como la sanidad, la educación y las infraestructuras son escasos, de baja calidad o se prestan de un modo poco equitativo, el contrato social se debilita.

CONCLUSIÓN

La percepción por parte de los ciudadanos de que los impuestos y el gasto son justos y eficientes, legitimidad fiscal, está estrechamente vinculada con la legitimidad de la propia democracia.

Para promover un crecimiento económico dotado de una base más amplia, con el fin de reducir la pobreza al tiempo que se igualan las oportunidades económicas, los gobiernos de AL deberían continuar apostando por la estabilización macroeconómica pero sin dejar de explotar a fondo este potencial de la política fiscal como instrumento de desarrollo.

La consolidación democrática también se vería beneficiada, pero para ello es necesario cambiar de enfoque y centrarse en el refuerzo de la legitimidad fiscal, una tarea que es tan política como técnica. ■

* (Basado en el Latin American Economic Outlook 2009 de la OCDE) www.oecd.org/dev/publications/leo2009